



RESOLUCION No. CSJBOR21-1466
3 de noviembre de 2021

“Por medio de la cual se acepta un desistimiento y se archiva una solicitud de vigilancia judicial administrativa”

Vigilancia judicial administrativa No: 13001-11-01-002-2021-00839

Solicitante: Richard José Trespalacios Bustos

Despacho: Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena

Servidor judicial: Damaris Salemi Herrera

Proceso: Declaración de existencia de unión marital de hecho

Radicado: 13001311000720210004200

Magistrado ponente: Iván Eduardo Latorre Gamboa

Fecha de sala: 3 de noviembre de 2021

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

Por mensaje de datos recibido el 12 de octubre de 2021, el señor Richard José Trespalacios Bustos solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho identificado con el radicado 13001311000720210004200, que cursa en el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que según afirma, luego de la notificación a los demandados y vencido el término para contestar la demanda, el despacho no ha efectuado las actuaciones pertinentes, a pesar de haber presentado memoriales de impulso procesal.

Por considerar que la solicitud de vigilancia judicial cumplía con los requisitos consignados en el artículo 3° del Acuerdo No. PSAA11-8716 de 2011, mediante auto CSJBOAVJ21-1243 del 15 de octubre de 2021, se dispuso requerir informe a la doctora Damaris Salemi Herrera, Jueza 7° de Familia del Circuito de Cartagena, y a la secretaría de esa agencia judicial, para lo cual se les otorgó el término de tres días, contados a partir de la comunicación del referido auto, actuación surtida el 25 de octubre del corriente año.

2. Desistimiento de la solicitud de vigilancia judicial administrativa

Por mensaje de datos recibido el 26 de octubre de 2021, el señor Richard José Trespalacios Bustos, radicó solicitud en la cual indicó:

“(…) En consulta con mi abogado de confianza y representante dentro del proceso aludido de investigación se pudo constatar que en realidad está pendiente por el suscrito un trámite de notificación por aviso a los demandados el cual no se ha realizado.

En este orden de idea le solicito a su honorable despacho aceptar el desistimiento de la acción invocada por las razones expuestas. (…)”.

Por lo anterior, se tiene que el quejoso solicitó a esta corporación el desistimiento expreso del trámite administrativo inicialmente pretendido.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es competente para conocer sobre la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Richard José Trespalacios Bustos, conforme a lo prevenido en el artículo 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, reglamentario del numeral 6° del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, habida cuenta que la petición se dirige en contra de uno de los despachados judiciales de esta circunscripción territorial.

2. Problema administrativo

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, esta corporación debe resolver si existe razón para aceptar el desistimiento del trámite de la vigilancia judicial administrativa o si, por el contrario, lo procedente es continuar de oficio la actuación administrativa y, en ese sentido, determinar si existe mérito para dar apertura al mencionado mecanismo o resolver de fondo la solicitud con fundamento en el artículo 6° del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, para lo cual abordarán primero los temas relacionados a continuación.

3. Alcances de la vigilancia judicial administrativa

El Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, adopta el reglamento respecto del mecanismo de la vigilancia judicial administrativa consagrada en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y establece en su artículo 1° que se concibe *“para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”* y que *“es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias”*, lo que conduce a inferir que el estudio se ciñe a determinar: *i)* cuestiones de incumplimiento de términos actuales porque las anomalías pasadas deben ser objeto de los procesos disciplinarios; *ii)* si un funcionario incurrió en acciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia; y *iii)* si existe una actuación en forma negligente o si por el contrario su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación o responsabilidad.

De otra parte, el artículo 14 del Acuerdo en comento prescribe: *“Independencia y autonomía judicial. En desarrollo de las actuaciones de vigilancia judicial administrativa, los Magistrados de la Sala Administrativa competente deberán respetar la autonomía e independencia de los funcionarios, de tal suerte que en ningún caso podrán sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones”*. Dicha norma se encuentra en consonancia con lo contemplado en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política y el artículo 5° de la Ley 270 de 1996, lo cual significa que la institución de la vigilancia judicial administrativa, como mecanismo administrativo que es, no está diseñado para controvertir decisiones judiciales, ni la forma como un funcionario interpreta una norma o valora las pruebas. Así mismo, es pertinente resaltar que este trámite no es otra instancia judicial y no puede emplearse para revivir términos.

En conclusión, esta atribución del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar es de naturaleza eminentemente administrativa y separada de la función jurisdiccional disciplinaria contra jueces y abogados, que le corresponde a la comisión de disciplina seccional.

4. Desistimiento expreso de las actuaciones administrativas

El artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, dispone que *“Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público; en tal caso expedirán resolución motivada”*.

Adicionalmente, en la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad de este artículo, señaló:

“la facultad de desistimiento expreso de las peticiones prevista en la norma constituye una dimensión del derecho de petición del cual puede disponer su titular”.

Así pues, los particulares que adelanten actuaciones administrativas, como las solicitudes que se presentan en ejercicio del mecanismo de vigilancia judicial administrativa, pueden desistir expresamente de estas y la autoridad administrativa respectiva podrá determinar si las continúa o no de oficio, siempre que exista acto administrativo motivado que dé cuenta de ello.

5. Caso concreto

El señor Richard José Trespalacios Bustos solicitó que se ejerza vigilancia judicial administrativa sobre el proceso de la referencia, que cursa en el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena, debido a que vencido el término para contestar la demanda, el despacho no ha efectuado las actuaciones pertinentes, a pesar de haber presentado memoriales de impulso procesal.

Mediante mensaje de datos recibido el 26 de octubre del año en curso, el quejoso solicitó el desistimiento expreso del trámite administrativo pretendido.

En este punto, precisa la corporación, que el peticionario se encuentra legitimado para desistir expresamente de la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada dentro del proceso de marras que cursa ante el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena, teniendo en cuenta que conforme al artículo 18 de la Ley 1437 de 2011, basta con la manifestación expresa en tal sentido por parte de aquel para que sea aceptada.

Igualmente, reza el artículo en mención, que la autoridad administrativa podrá continuar de oficio la actuación siempre que lo considere necesario por razones de interés público, mediando, en todo caso, acto administrativo motivado que así lo considere.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el objeto de la solicitud recae sobre la presunta mora en la que se encontraba incurso el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena en continuar con las etapas procesales que siguen a la contestación de la demanda, y que, al momento de la presentación de la solicitud de vigilancia, no había sido efectuado.

Así las cosas, se tiene que el peticionario solicitó el archivo y cierre de solicitud de vigilancia judicial, en razón a que el despacho requerido indicó que se había requerido al quejoso para aportar datos y documentos faltantes para continuar la actuación procesal. Siendo ello así, se evidencia que el quejoso perdió el interés de seguir con las resultas de esta actuación administrativa.

6. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, esta seccional aceptará el desistimiento de la solicitud de vigilancia judicial administrativa presentada por el señor Richard José Trespalacios Bustos y, en consecuencia, se dispondrá el archivo de este trámite.

De conformidad con lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,

3. RESUELVE

PRIMERO: Aceptar el desistimiento expreso de la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Richard José Trespalacios Bustos, sobre el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho identificado con el radicado 13001311000720210004200, que cursa en el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

SEGUNDO: Abstenerse de continuar con el trámite y archivar la solicitud de vigilancia judicial administrativa promovida por el señor Richard José Trespalacios Bustos, sobre el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho identificado con el radicado 13001311000720210004200, que cursa en el Juzgado 7° de Familia del Circuito de Cartagena, por las razones anotadas.

TERCERO: Comunicar la presente resolución al solicitante y a la doctora Damaris Salemi Herrera, Jueza 7° de Familia del Circuito de Cartagena.

CUARTO: Contra esta decisión solo procede el recurso de reposición, que deberá ser interpuesto dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, ante esta misma corporación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 17 y siguientes.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

IVÁN EDUARDO LATORRE GAMBOA
Presidente

MP. IELG / KLDS